

Seis comentarios a partir de lo vivido

Santiago Pedraglio

El Perú estuvo cuatro meses capturado por la toma de la residencia del embajador del Japón por el MRTA. Finalizada la aventura emerretista, rescatados con vida setenta y un rehenes, y muertos diecisiete protagonistas como producto del operativo militar –un rehén, dos oficiales del ejército y los catorce subversivos– es hora de intentar un apretado balance.

1. Aún perdura la lógica de la guerra. Tras diecisiete años del inicio de la lucha armada por Sendero Luminoso, en el Perú los conflictos portadores de violencia siguen siendo resueltos a través de la violencia. La captura de la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki no puede ser tipificada sino como una acción terrorista, de violación de derechos elementales. El MRTA nunca puso en el centro de sus demandas su ingreso a la legalidad ni algo parecido a un acuerdo de paz. La respuesta del gobierno, por más exitosa que sea evaluada por el propio régimen y la mayoría de la población, está, a su vez, subordinada a la lógica de que ante la violencia subversiva la mejor respuesta para mantener la autoridad es la violencia del Estado.

2. La imposibilidad de lograr una solución pacífica significó no sólo la pérdida de vidas humanas. Fue una señal de que aún no es posible encontrar formas de solución no violentas a conflictos de alta tensión en la sociedad peruana. La salida pacífica significaba la aplicación de una metodología diferente para consolidar la autoridad gubernamental frente a la población. La terquedad del MRTA y su insistencia en liberar a sus dirigentes presos fueron una traba evidente; empero, no se puede afirmar que la etapa de la negociación hubiera concluido, que no quedaba sino la solución militar. Hubo propuestas concretas para hacer viables, dentro del marco de la ley, algunas concesiones por el lado del gobierno, pero no se tomaron en cuenta. Los garantes se cuidaron de señalar, en su comunicado de despedida, que la decisión final fue inesperada y de responsabilidad exclusiva del gobierno peruano.

3. La subversión armada alienta el autoritarismo y lo legitima ante sectores significativos de la población. Esta reacción no es nueva, se ha dado en los últimos diecisiete años de conflicto militar interno. Algo más: se mostró cómo una acción violenta puede suspender el desarrollo de un movimiento de opinión democrática, en este caso de crítica al presidente Alberto Fujimori. En diciembre la captura de la residencia hizo abortar el descontento que crecientes sectores de la población tenían frente al modelo económico y al ejercicio autoritario del poder. El MRTA actuó sin considerar esta realidad. Al producirse el desenlace, el gobierno volvió a capitalizar políticamente lo sucedido. Por primera vez el asesor Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza sintieron que tenían luz verde (o que la habían conquistado) para aparecer juntos en público.

4. La oposición política no arriegó. Es cierto que una acción como la del MRTA polariza la

confrontación entre el gobierno y la subversión armada; sin embargo, durante los cuatro meses transcurridos, los diferentes sectores de la oposición oscilaron entre pedirle al gobierno una salida pacífica y levantar el garrote contra él acusándolo por anticipado de que cualquier concesión violaría el estado de derecho y que una «debilidad» era inadmisibles. Todas sus vertientes esperaron los resultados para opinar. No actuaron como una fuerza que quisiera inaugurar, el año 2000, una nueva forma democrática de ejercer el poder político y de enfrentar la violencia terrorista.

5. La Iglesia Católica tuvo un papel muy activo. La decisión final del gobierno no eclipsó su labor, a diferencia de lo que sucedió con otras instituciones que intentaron cumplir con su papel como parte de la sociedad civil durante la crisis –gremios profesionales, universidades, «oenegés». La Iglesia arriesgó con la mediación de monseñor Juan Luis Cipriani, a nombre de la Santa Sede, y con la voluntaria permanencia del sacerdote Juan Julio Wicht en la casa tomada. El resultado es la consolidación de la autoridad moral de la Iglesia. El gesto de Juan Julio Wicht tiene una repercusión que vale más que todos los discursos.

6. A pesar de que la lógica de guerra ha prevalecido en la solución de la crisis y de que ésta fue finalmente bien recibida gracias a sus resultados, en la opinión pública no se ha consolidado mayoritariamente un sentimiento guerrerista ni en pro del autoritarismo. El 80% de los limeños lamenta la muerte de las diecisiete persona; no sólo la del doctor Giusti y las de los dos oficiales del ejército. Quienes acicatearon el surgimiento (o resurgimiento) de una moral ciudadana maniquea, entre el bien y el mal, el blanco y el negro, Dios y Satanás, no lograron su objetivo. No se acentuó un clima de vigencia del autoritarismo y del acriticismo. Las críticas al gobierno y los impases por resolver (denuncias por torturas y muertes, resistencia a nueva reelección, descontento por el desempleo, etc.) permanecen vigentes en la población.

Las opiniones de monseñor Cipriani resumen este estado de ánimo. Con la recuperación violenta de la residencia, afirma él, su trabajo «terminó con sentimientos encontrados. Por un lado con el dolor de las lamentables pérdidas de vidas humanas; y, por otro lado, con el enorme alivio de tantas personas y sus familiares, que recuperaron su libertad y pudieron encontrarse nuevamente unidos» (**El Comercio**, 1/5/97). Su relato sobre la amistad que entabló con la familia de Néstor Cerpa, y sus sentidas palabras al respecto, indican el importantísimo reconocimiento –por muy elemental que pueda parecer– de que el conflicto militar interno se da entre peruanos, entre seres humanos como uno, con nombre, apellido y una historia personal. Un punto de partida indispensable para encontrar salidas políticas a una paz esquiiva y a una violencia que no ha terminado.